Arica, treinta de agosto de dos mil diez.

Vistos:

Por sentencia de quince de abril del año en curso, dictada en la causa RUC N° 0710014873-5, RIT N° 221-2009, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, se condenó a **Gabriela del Carmen Blas Blas**, a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias legales pertinentes y al pago de las costas del juicio como autora del delito de abandono de un menor de diez años en lugar solitario, establecido en el artículo 349 en relación al artículo 351, ambos del Código Penal, acaecido el día 23 de julio de 2007, sin beneficios alternativos. Además, absuelve a la misma sentenciada de la acusación formulada en su contra como autora de los delitos de incesto, de obstrucción a la investigación y abandono de menor de diez años simple y a Cecilio Blas Blas de la acusación formulada en su contra como autor del delito de incesto.

En su contra el abogado defensor penal público, don Víctor Providel Labarca, en representación de la sentenciada Gabriela Blas Blas, dedujo recurso de nulidad, invocando como causal principal aquella contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, fundada en dos órdenes de razones, a saber: vulneración del debido proceso (derecho de defensa) y de la presunción de inocencia (inversión de la carga de la prueba). En subsidio de las anteriores, planteó la causal del artículo 374 letra e), en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, por supuestos defectos en la valoración probatoria y fundamentación del fallo. Finalmente, también en forma subsidiaria, esgrimió la causal prevista en el artículo 373 letra b) del mismo cuerpo legal.

Elevados los antecedentes a la Excma. Corte Suprema, en razón de las causales principales, dicho tribunal declaró inadmisibile la primera, por falta de preparación, y recondujo la segunda, así como el resto del recurso, por estimar que su conocimiento correspondía a esta Corte, ya que los hechos denunciados constituirían más bien el motivo absoluto previsto en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal.

Declarado admisible el señalado recurso por resolución que rola a fojas 65, se fijó día para la audiencia, la que tuvo lugar el día martes 10 de agosto recién pasado, luego de lo cual, oídos que fueron los intervinientes, quedaron los autos para fallo.

CONSIDERANDO:

SÍNTESIS DEL RECURSO.

PRIMERO: Que, en cuanto quedó subsistente del análisis de admisibilidad efectuado por nuestro Máximo Tribunal, el recurso promovido por la defensa de

Gabriela Blas Blas, debe entenderse sustentado, en primer lugar, en el motivo absoluto de nulidad contemplado en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal. Al efecto la recurrente sostuvo que los jueces del fondo infringieron el estado jurídico de inocencia de la acusada, al alterar la carga probatoria, lo que se advierte en dos aspectos relevantes del juicio: a) En la acreditación-determinación de los elementos objetivos del tipo objetivo, y b) En la acreditación del elemento subjetivo del tipo penal. Añadió que en el fallo impugnado, luego de escuchar la declaración de la acusada y el testimonio de los testigos y peritos, especialmente aquella prestada por los funcionarios policiales, se concluye lo siguiente: “Conforme a estos dichos, estos sentenciadores pueden **dar por acreditada una conducta anómala para una madre, independiente de su origen étnico**,..., es la conducta errática de la acusada asumida desde el momento que se acerca a realizar su denuncia, la que no es congruente con su conducta posterior, especialmente la de cambiar lugares, involucrar a otras personas, designar evidencias que sabía falsas, incluso aceptar dar muerte a su hijo. Esta conducta a juicio de estos sentenciadores permiten restarle toda verosimilitud a su versión de extravío, especialmente que lo haya dejado a un kilómetro de la Estancia Caicone junto a los animales para ir en busca de aquellos que estaban retrasados. Dicha versión no tiene sustento probatorio alguno, salvo sus propios dichos, los que como se ha explicado resultan del todo erráticos. La tesis de la defensa se basa precisamente en aceptar como plausible tal versión, lo que conforme a los testimonios ya reseñados no lo son. Ahora bien, no siendo plausible en este contexto la versión de la acusada, **es razonable entender que el menor fue dejado por la acusada en algún sector cercano a la Estancia Caicone, puesto que en todas sus versiones, al menor, se coloca en dicho sector, además, es un hecho acreditado que tanto ella como su hijo Domingo Blas se encontraban en la Estancia desde el 17 de julio** a requerimiento de Cirilo Silvestre Blas, a fin de pastorear su ganado por la suma de \$3.000 diarios quien declaró en estrados expresando estas circunstancias”.

A continuación expresa que los jueces concluyen conforme a la “conducta anómala para una madre” que se debe restar “toda verosimilitud” a las versiones de la defensa respecto del extravío del menor, intentando dar una explicación de lo sucedido, presumiendo ciertos hechos e interpretando las declaraciones de la acusada en su contra. En el considerando 9° los magistrados manifestaron que: “entre los días 18 al 23 de julio de 2007, con pleno conocimiento de las relaciones que la ligaban con el menor y de las características geográficas y climáticas de la zona, de la cual la acusada es oriunda, abandonó a la víctima en los alrededores de Estancia Caicone”. Para llegar a dicha conclusión, en el mismo considerando, señalan: “la única coincidencia en las versiones de la acusada, es la de haber estado con el menor en la estancia Caicone, de tal manera, que en algún

momento lo dejó solo, ya sea por haberlo llevado a un lugar determinado o no, pero en todo evento, sin recogerlo, colocando a un niño de tres años en una situación de desamparo real, donde no podía ser socorrido. Sólo así es posible entender el ocultamiento a Carabineros y a la Policía de Investigaciones del lugar preciso donde lo habría dejado o entregado según una de sus versiones”.

La acusada durante el juicio manifestó que su hijo [REDACTED] se extravió el día 23 de julio de 2007, a eso de las 17:00 horas realizando labores de pastoreo en el sector de Caicone.

Agregó el letrado defensor que la alteración de la carga de la prueba es evidente, pues su parte dio una versión de los hechos que explica razonablemente, a la luz de la experiencia de la labor de pastoreo en zonas altiplánicas y al conocimiento y experiencia de Gabriela Blas, el extravío de su hijo. Sin embargo, dado el prejuicio del tribunal en su contra, a quien acusan de ejecutar conductas anómalas para una madre, sin explicar qué es lo esperable para una madre modelo, y al restar toda verosimilitud a su relato, concluyen que la única explicación razonable para los hechos es que la imputada abandonó a su hijo en el sector de Caicone y no lo recogió, sabiendo las consecuencias que dicho abandono provocaría al menor. Es decir, entiende que, no obstante la ausencia de otra prueba que permita acreditar, más allá de toda duda razonable el curso de los hechos, concluye que Gabriela abandonó a [REDACTED], sin recogerlo, agregando que sólo así es posible entender las versiones contradictorias que da sobre los hechos. Esto, en la práctica, significa poner de cargo de la defensa determinar, explicar y acreditar las circunstancias del extravío del menor.

Luego, al momento de acreditar el elemento de “lugar solitario” y los riesgos concretos a los que pudo quedar expuesto el menor, el fallo expresa en su considerando 9° “la acusada, deja al niño en un sector de la estancia Caicone para luego denunciar un presunto extravío al día siguiente, sin indicar concretamente el lugar donde realmente habría dejado al menor, por lo que no es posible entender que la acusada asumiera que dejaba al menor en un lugar que estaba protegido y sin riesgos o donde podía recibir ayuda en caso de peligro, puesto que conocía perfectamente las condiciones del lugar y, que si dejaba a su hijo, sin ningún resguardo, éste necesariamente debía correr peligro para su integridad física, como ocurrió”.

Afirma que, nuevamente los jueces invierten la carga probatoria y exigen que la acusada demuestre que el lugar carecía de peligros concretos para la vida o salud de su hijo. Una adecuada ponderación del principio de inocencia lleva a concluir que corresponde al Ministerio Público la acreditación de que, al momento en que se produjo el extravío, existían peligros concretos para la vida de [REDACTED] y no dejar tal actividad probatoria en manos de la defensa.

La insuficiencia probatoria, en temas esenciales para sostener la acusación, no trajo consecuencias para la Fiscalía, subsidiando el tribunal en ello al acusador.

También demuestra la vulneración de la presunción de inocencia el considerando duodécimo, al expresar “los hechos objetivos son a) se encontraba sola con su hijo en la Estancia Caicone, b) regresó sin el menor, c) dio versiones distintas sobre los motivos de no tener a su hijo en esos momentos”. El fallo no estudia la prueba de cargo, sino que exige a la defensa demostrar la inocencia de la acusada.

De otro lado, el fallo impugnado, al momento de dar por acreditado el elemento subjetivo del delito señala “En cuanto al tipo penal subjetivo, se coincide con la defensa en el sentido que el dolo debe abarcar tanto el abandono como el resultado y en este sentido, el hecho de dejar a su hijo en el sector de la pampa Caicone, sin regresar a lugar seguro con él, es constitutivo de su dolo de abandonar al menor y el dolo eventual en relación al resultado producido, esto es, la muerte”. En este punto los jueces otorgan plena validez a las declaraciones de los funcionarios policiales que interrogaron, fuera de toda legalidad, a Gabriela Blas y que, conforme a ellos, se le resta toda verosimilitud a la versión de la acusada: por ello no sorprende que al momento de discernir acerca del dolo concluya lo antes indicado.

La acusada, entonces, para ser absuelta, debió acreditar que no abandonó a su hijo y que no existían peligros concretos para la vida y salud del menor al momento del extravío, así como que su actuación no fue dolosa.

Así las cosas los jueces, al imponer a la defensa la carga de la prueba, con el objeto de explicar hechos o circunstancias que se le imputaban a la acusada violentaron su estado de inocencia.

Añade el recurrente que el estándar de prueba de la duda razonable tampoco fue respetada, pues, en su opinión, sólo se aplicó un estándar de preponderancia de evidencia, propio de la jurisdicción civil, eligiendo la mejor versión y no la certeza que exige la ley. Cita al efecto el considerando 9º, en la parte en que los jueces aluden a los atestados de la acusada en juicio, en los términos anteriormente transcritos. Allí se hace una contraposición de versiones, entre los dichos de la acusada, inverosímiles de acuerdo a las conclusiones del fallo, y la versión de los demás testigos de cargo, descartando, además, por completo y en bloque “la versión” de la acusada, haciendo primar una versión por sobre otra.

En segundo lugar, el recurso se sustenta, subsidiariamente, en la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 342

letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, pues la sentencia, en su considerando noveno, resta toda credibilidad a la acusada en razón de un supuesto comportamiento anómalo para una madre, incluso para alguien que pertenece al pueblo Aymara, sin embargo no explica cuál sería la conducta esperable para una madre que recién ha extraviado a su hijo en labores de pastoreo en la zona altiplánica. Con ese razonamiento el tribunal llena todos los vacíos de la investigación, con infracción a los parámetros de sana crítica, además de contener conclusiones que no aparecen respaldadas por actividad probatoria del Ministerio Público en juicio.

En cuanto a la conducta de abandono, en el considerando noveno, el tribunal la infiere desde los dichos de la acusada, reconociendo que no tiene elementos de convicción para ello, interpretando en ese sentido la conducta anómala para una madre, sin precisar cuándo, dónde y en qué condiciones se habría producido el abandono.

Respecto a las condiciones de peligro existentes al momento del abandono, el mismo fundamento noveno expresa “no es posible entender que la acusada asumiera que dejaba al menor en un lugar que estaba protegido y sin riesgos o donde podía recibir ayuda en caso de peligro, puesto que conocía perfectamente las condiciones del lugar y, que si dejaba a su hijo, sin ningún resguardo, éste necesariamente debía correr peligro para su integridad física, como ocurrió. Conducta que aún en contexto de la estructura social Aymara también es merecedora de reproche. De esta manera, estos sentenciadores entienden que tanto la edad del menor y las características del sector han incidido en un peligro real para el menor, lo que se concretizó en su muerte”. La pregunta que queda sin respuesta es ¿cuáles eran los peligros concretos que existían al momento de dejar a Domingo en los alrededores de la Estancia Caicone, y que conocía la acusada? Una primera aproximación será la edad del menor (3 años 11 meses) y las características del sector (una pampa del altiplano de la Provincia de Parinacota). Sin embargo, al concluir las pericias científicas que la causa de la muerte del menor es indeterminada, surge la inconsistencia y falencia lógica del fallo: atribuyen a Gabriela conocimiento de peligros concretos que asediaban a su hijo al momento de dejarlo, pero no se expresan cuáles eran dichos peligros concretos, en qué se manifestaron, cómo es que Gabriela los conocía y cómo estos elementos tienen relación con la muerte de [REDACTED]. Y lo más grave, que tampoco se menciona qué elementos probatorios sirvieron para arribar a tal conclusión. Los jueces, en forma temeraria, para reafirmar sus conclusiones agregan que “en la imposibilidad de ser ayudado o ser socorrido ante los peligros, especialmente la caída de la noche con temperaturas bajo cero, con temperaturas que no pueden ser soportadas por un niño más allá de cinco horas, agravado por la geografía del lugar, que si bien, gran parte es planicie, también existen diversos accidentes

geográficos”. Continúan más adelante, ya no insinuando, sino que afirmando categóricamente que “sea cual fuere la motivación del abandono, lo cierto es que, dejar al menor en una situación de desamparo, en una noche con bajas temperaturas, sin posibilidad de ser socorrido, colocó al menor en una situación de riesgo real, lo que le llevó a encontrar la muerte”.

Expresa el recurrente que dicho punto es esencial, porque el fallo en esta parte determina, que sobre la base de la prueba rendida, ha dado por concluido que la muerte se produce a consecuencia del abandono que ejecuta la acusada en una noche con bajas temperaturas, lo que interpretado armónicamente debe llevar a concluir que [REDACTED] [REDACTED] falleció a consecuencia de una hipotermia, sin que exista indicio, prueba directa o indirecta, que respalde tal aserto, lo que importa una violación a las reglas de la lógica, careciendo de sustento con los demás elementos de prueba.

La sentencia habla de peligros que no menciona y se detiene especialmente en la “caída de la noche”, dando a entender que tiene un efecto directo en la muerte de Domingo, pero sin que exista una prueba o indicio que el abandono, en los términos del fallo, se haya producido en la noche. Más aún, ante la imposibilidad de fijar el momento del extravío, el fallo decide aceptar la tesis del Ministerio Público, situándolo en algún momento entre el 18 al 23 de julio de 2007.

En lo que hace a las causas de la muerte y atribución del resultado al abandono, se reconoce que la causa de muerte es indeterminada, pero concluye algo que ningún perito se atrevió a exponer: que la data cercana de la muerte a la fecha de la denuncia acredita el carácter peligroso del abandono y del sector. Esta afirmación recogida en los hechos que el fallo da por acreditados, no tiene respaldo científico, los peritos Pedro Iriondo, José Beletti y Luis Ravanal son contestes que las conclusiones de su informe no se relacionan ni con la conducta de la acusada, ni con las características del lugar, o lo peligroso o no que puede resultar para un niño de casi 4 años. Pero los jueces van un paso más allá de los conocimientos científicamente afianzados al afirmar que las bajas temperaturas de la noche en que se produjo el abandono, colocó al menor en una situación de riesgo real, lo que le llevó a encontrar la muerte.

La conclusión de la época del abandono y de la muerte del menor no tiene sustento en los elementos de convicción, los jueces desconocen el momento del abandono y la data de la muerte, pero igual concluyen que ello se produjo el 23 de julio de 2007, o sea acreditan un hecho sin respaldo en la prueba, incumpliendo la exigencia contenida en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, en cuanto requiere la exposición clara, lógica y completa no sólo de los

hechos y circunstancias de la causa, sino que también en relación a la valoración de los medios de prueba que fundamentaren las conclusiones de la sentencia.

En tercer lugar, en forma subsidiaria, invocó la causal establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, estimando infringidos los artículos 1º, inciso 1º, 349 y 351 del Código Penal, al momento de hacerse la calificación jurídica de los hechos.

Expresa que para la doctrina nacional los elementos del tipo imputado son los siguientes: a) Como delito de peligro concreto, el elemento subjetivo debe analizarse ex ante, situándose el juzgador en el momento en que se realizó la acción; b) Los resultados muerte o lesión grave que sufra el menor deben estar en relación de causa a efecto con el abandono y ser susceptibles de imputarse objetivamente a la referida acción, quedando descartados el caso fortuito o fuerza mayor, y c) Habrá simple abandono cuando, a pesar del peligro corrido por el ofendido (peligro que puede derivar en su muerte), han existido potenciales cursos salvadores que el autor del delito no ha excluido o impedido deliberadamente.

Según el fallo es posible imputar objetivamente el resultado muerte a la acusada pues “generó un riesgo más allá de lo permitido...al dejar al menor en una situación de desamparo, en una noche con bajas temperaturas sin posibilidad de ser socorrido, colocó al menor en una situación de riesgo real, lo que le llevó a encontrar la muerte” (considerando 10º).

Señala el recurrente que, la teoría de la imputación objetiva es una construcción normativa que tiene por objeto corregir las desviaciones de las teorías de la causalidad, pero que no las reemplaza. El fallo omite establecer la relación causal entre la conducta de la acusada (abandonar a su hijo en los alrededores de la estancia Caicone) y el resultado de muerte de su hijo, encontrado a más de 12 kilómetros del lugar del extravío, y que según los testimonios de los peritos legistas, la muerte se ha producido en el mismo lugar donde ha sido encontrado, según demuestran los exámenes practicados al cadáver. Según los hechos acreditados por el tribunal “[REDACTED] falleció en una fecha cercana al día del abandono por su madre, producto de éste, siendo relevantes en este resultado mortal las condiciones climáticas, geográficas y de aislamiento de la zona donde ocurrió el abandono”.

Llama la atención que el fallo establece como condiciones relevantes de la muerte factores existentes en el lugar del abandono (alrededores de la Estancia Caicone), sin hacer mención a las condiciones del lugar donde se habría producido la muerte, esto es, a 12 kilómetros de allí.

De otro lado, todos y cada uno de los peritos que declaran en el juicio establecen que la causa de la muerte es indeterminada y la sentencia establece el vínculo de causalidad por el carácter peligroso del abandono en que fue expuesto el menor.

Manifiesta que un análisis correcto de las disposiciones legales citadas debe llevar a la conclusión que debe existir un alejamiento imputable al agente y que genere para el sujeto pasivo una situación de riesgo, que en el caso que sea buscado intencionalmente daría lugar a un abandono con dolo directo, o con dolo eventual en el evento que la imputada no haya sabido que no tenía capacidad para prevenir el resultado, pero haya actuado de todas formas. Y es en este punto donde se manifiesta la errada aplicación del derecho sobre la imputación objetiva del resultado de muerte, las condiciones climáticas, geográficas y de aislamiento de la zona donde ocurrió el abandono no satisfacen la exigencia mínima de una relación de causalidad entre dichas condiciones y la actividad de la acusada, pues, si se trata de un delito de resultado no todo alejamiento produce necesariamente una situación de peligro y no toda situación de peligro es efecto de un alejamiento: debe tratarse de un alejamiento espacial que tiene como efecto un riesgo de producción de muerte concreto.

Añade el recurrente que, en el ámbito subjetivo, el fallo establece que la acusada habría actuado con dolo eventual respecto del resultado de muerte de su hijo, fundado en que “dejar a su hijo en el sector de la pampa Caicone, sin regresar a lugar seguro con él, es constitutivo de dolo de abandonar y al menos el dolo eventual en relación al resultado producido, esto es, la muerte”.

Su parte, en tanto, ha postulado que el juicio de imputación subjetiva se debe realizar tomando en consideración los conocimientos y experiencia de la acusada en la labor de pastoreo junto a sus hijos, como miembro del pueblo Aymara, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y al Ley N° 19.253, como práctica cultural que genera riesgos para terceros, lo que conlleva la necesidad de una evaluación diferenciada de su conducta. No obstante, el fallo desechó la aplicación de estas normas, pese a la opinión de expertos, al sostener que en este caso no está comprometida la costumbre Aymara.

El tribunal erróneamente ha usado el hecho “dejar a su hijo en los alrededores de la Estancia Caicone” para imputar subjetivamente a la acusada tanto el abandono como el resultado de muerte.

Para todas las causales la recurrente solicitó la nulidad del juicio oral y de la sentencia, disponiendo que se remitan los antecedentes a un tribunal no

inhabilitado para la realización de un nuevo juicio y el pronunciamiento de una nueva sentencia.

SEGUNDO: Que, en la vista del recurso el abogado defensor penal público, don Víctor Providel Labarca, adicionalmente, expresó que el cuerpo del menor fue encontrado un año y medio después de su desaparición, existiendo dudas respecto de la identidad de dicho cadáver, pues lo único que concluyó el perito químico, al analizar el tejido biológico fue la maternidad biológica de la acusada respecto del cadáver, con un alto grado de probabilidad, pero sin establecer su identidad, a través del respectivo certificado de defunción.

PLANTEAMIENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO.

TERCERO: Que el representante de la Fiscalía, abogado Richard Toledo Hidalgo, instó por el rechazo del recurso, respecto a las primeras dos causales porque la recurrente no indica, específicamente, en qué consistió la infracción a las reglas de la sana crítica y, en cuanto a la tercera causal, por estimar que la calificación jurídica es la adecuada, atendidos los hechos probados.

ANÁLISIS DE LAS CAUSALES.

CUARTO: Que, como ya se indicó, las dos primeras causales dicen relación con el mismo vicio, vale decir, la omisión de los requisitos previstos para la sentencia definitiva en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, esto es, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del mismo cuerpo legal. Siendo así, ambos motivos de nulidad serán analizados conjuntamente.

QUINTO: Que, de la lectura del recurso se desprende que los defectos alegados dicen relación con la infracción de los parámetros de sana crítica, por parte de los sentenciadores, al momento de valorar la prueba del juicio, careciendo sus conclusiones fácticas de apoyo directo en los elementos de prueba rendidos en el mismo.

Al efecto debemos recordar que la **sana crítica** es un sistema de valoración probatoria fundado en la razón, eminentemente judicial, que se ubica en una posición intermedia entre la prueba legal o tasada y la íntima convicción.

A través de la valoración probatoria libre, pero razonada, nuestro ordenamiento jurídico adscribe a una perspectiva racionalista o cognoscitivista de la prueba judicial, en cuya virtud la búsqueda de la verdad constituye uno de los objetivos primordiales del procedimiento penal. El juez, entonces, en su fallo debe

concluir si los enunciados fácticos planteados por los intervinientes son verdaderos, falsos o no resultan probados.

Al asumir dicha perspectiva la decisión judicial, en el ámbito fáctico, se torna susceptible de control por las partes, pudiendo estas fiscalizar, a través de su derecho al recurso, si existen efectivamente materiales externos y perceptibles que entreguen noticias de los hechos que se han dado por probados en el fallo.

La racionalidad que importa la sana crítica exige la concurrencia de elementos controlables y verificables mediante criterios intersubjetivos, sólo de esa manera podremos hablar de una decisión justificada. Por el contrario, si el tribunal no cuenta con ese respaldo ha caído en la mera subjetividad y arbitrariedad, que no admite controles.

Por lo tanto, la valoración de la prueba del juicio será sana cuando el juez realiza una ponderación acuciosa, imparcial y orientada con los elementos de prueba aportados al litigio.

Bajo este modelo, se exige una completa motivación de las conclusiones probatorias, como garantía y herramienta de control de los parámetros que dicta la razón. Se trata de un diseño analítico que requiere motivación estructurada en forma dialógica, que comprenda no sólo la justificación lineal de la hipótesis fáctica escogida, sino también la valoración singularizada de las pruebas desestimadas y la confrontación de las hipótesis desechadas; lo que refleja adecuadamente el carácter relacional de la justificación de los enunciados que declaran hechos probados respecto del conjunto de elementos de juicio representado por todas las pruebas admitidas y practicadas en el proceso y constituye el necesario correlato de la garantía de un proceso contradictorio.

Esta metodología conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la razón y el criterio racional, puesto en juicio. De modo que la correcta aplicación de los parámetros de sana crítica y la adecuada motivación de las conclusiones probatorias acarrea el efecto de que las decisiones judiciales no resulten puros actos de voluntad o fruto de meras impresiones de los jueces, sino que sean consecuencia de la consideración racional de las pruebas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre por qué se concluyó y se decidió de esa manera (y no de otra), explicación que deberá ser comprensible y compartible por cualquier tercera persona, también mediante el uso de la razón.

El artículo 297 del Código Procesal Penal describe lo que hemos venido sosteniendo al estatuir que “Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”. Luego agrega en su inciso segundo: “El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda

la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”. Y su inciso final termina diciendo: “La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.

SEXTO: Que, dentro de las reglas de la lógica formal, a que alude el precepto antes transcrito, destaca el **principio de razón suficiente**, en cuya virtud ninguna enunciación puede ser verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. Dice relación, entonces, con la razón teorizante que busca fundamentar el conocimiento (criterio formal de fundamentación, como *ratio cognoscendi* o condición de validez gnoseológica), como fundamento de verdad de los juicios. Todo conocimiento que se afirme en una sentencia debe estar suficientemente fundado, de modo que cada decisión del juez se sustente en determinadas circunstancias del caso y en determinadas normas, conformando su *ratio decidendi*.

Cuando vamos en busca de la razón suficiente de una conclusión fáctica debemos investigar el apoyo o fundamento material de lo enunciado dentro de la prueba del juicio. En consecuencia, el razonamiento probatorio del tribunal, de naturaleza inductiva, debe estar constituido por inferencias adecuadamente extraídas de los elementos de prueba aportados por los intervinientes y derivarse de la sucesión de conclusiones que, en base a ellos, se vayan determinando, además, debe ser concordante y constringente, en cuanto cada conclusión negada o afirmada, responda adecuadamente a un elemento de convicción del cual se puede inferir aquélla (la conclusión), y, finalmente, que la prueba sea de tal entidad que realmente pueda considerarse fundante de la conclusión, de tal forma que aquella sea excluyente de toda otra (necesaria; inequívoca).

El principio en análisis requiere, entonces, la demostración de que un enunciado sólo puede ser así y no de otro modo. Si la ley exige certeza sobre los extremos fácticos de los que se hacen desprender las consecuencias jurídicas emanadas de la sentencia, se requiere que la prueba en que se basa la decisión sólo pueda dar fundamento a esas conclusiones y no a otras.

SÉPTIMO: Que, para definir si procede o no acoger la causal de nulidad en análisis debemos chequear previamente la forma como el tribunal dio por establecidos los hechos, en su considerando 9°.

En el párrafo penúltimo de dicha motivación el tribunal del fondo fijó como hechos a juzgar los siguientes: “El día 18 de junio de 2007, la acusada se

trasladó hasta la Estancia Caicone, ubicada a una distancia aproximada de 17 kilómetros del caserío de Alcérreca, en la Comuna de General Lagos, en el sector del altiplano, llevando consigo a su hijo de 3 años [REDACTED], el que se encontraba bajo su cuidado. En las circunstancias antes señaladas, en la posición de garante que la acusada detentaba respecto del menor [REDACTED] [REDACTED], y entre los días 18 al 23 de julio de 2007, con pleno conocimiento de las relaciones que la ligaban con el menor y de las características geográficas y climáticas de la zona, de la cual la acusada es oriunda, abandonó a la víctima en los alrededores de Estancia Caicone, lugar donde no existen más pobladores, siendo las localidades de Alcérreca y Humapalca los centros poblados más próximos, sin velar por el cuidado del menor, ni por su alimentación o abrigo necesarios para su supervivencia, conociendo perfectamente las consecuencias que dicho abandono generaría en su hijo, esto es, que ocasionaría su muerte, siendo encontrado el cuerpo del menor el día 2 de diciembre de 2008 en el sector denominado Palcopampa, distante aproximadamente a 12 kilómetros del caserío Caicone. El menor [REDACTED] falleció en una fecha cercana al día del abandono por su madre, producto de éste, siendo relevantes en este resultado mortal las condiciones climáticas, geográficas y de aislamiento de la zona donde ocurrió el abandono”.

OCTAVO: Que, si bien parte de tales hechos fluyen naturales y directamente de la información aportada por la prueba rendida en el juicio, en otros aspectos, en que dichos sucesos no surgen de manera evidente, resultaba indispensable una adecuada explicación de la conclusión probatoria por parte de los jueces. Esta última situación se observa, especialmente, en los asertos fácticos relativos al “abandono” de la víctima por la acusada; al conocimiento, por parte de ésta, de las consecuencias mortales de tal abandono; a la data de muerte del menor, y a las causas que provocaron tal deceso.

En primer lugar, en cuanto a la circunstancia del “abandono”, cuestión diversa a un mero extravío no intencionado, ella es inferida por los sentenciadores desde el comportamiento errático que la acusada mantuvo al denunciar y durante la investigación, dando múltiples versiones, según los dichos de los funcionarios policiales, conducta que es calificada por el tribunal de “anómala para una madre, independiente de su origen étnico”, y desde la cual se le resta toda verosimilitud a su versión de extravío, añadiendo que carecía de sustento probatorio adicional. De ahí entienden que el menor fue “dejado” por la acusada en algún sector “solitario”, cercano a la Estancia Caicone, sin recogerlo, en situación de desamparo real.

Como puede apreciarse en el fallo impugnado, de las dos versiones en juego, a saber: el “abandono” sostenido por el ente acusador y el “extravío”

afirmado por la acusada y su defensa, el tribunal ha optado por la primera y para ello sólo se ha tenido en consideración las impresiones que en su conciencia han dejado los dichos de los funcionarios policiales, respecto de la conducta mantenida por la imputada durante la pesquisa. Esa es la razón que se aporta para sustentar el juicio emitido y ella debe ser ahora controlada bajo los parámetros de la sana crítica, teniendo siempre en consideración la exigencia epistemológica contenida en el artículo 340, inciso 1°, del Código Procesal Penal, esto es, convicción más allá de toda duda razonable.

El principio de razón suficiente, como ya se adelantó, exige para la corrección lógica de la conclusión, que ésta sea necesaria, inequívoca, excluyente de toda otra, cualidades de las que carece el razonamiento empleado por los sentenciadores del fondo, pues la conducta de la acusada, por cierto errática, no conduce indefectiblemente a sostener que ella dejó abandonado al menor en forma intencional en ese lugar solitario, pues, dicho comportamiento inusual, también podría obedecer a otras razones, como el temor por la reacción familiar y de la autoridad policial.

En segundo lugar, respecto de la determinación del conocimiento de las consecuencias mortales del “abandono” por parte de la imputada, ella se afirma sin nuevos elementos de apoyo, a través de una argumentación meramente circular, en las mismas impresiones que les dejó la testimonial de los policías, situándose los juzgadores ex post, esto es, cuando el resultado mortal ya se produjo. En este punto, fuera de la testimonial mencionada, no existe más que lo declarado por la acusada en la audiencia y las características climáticas y de soledad del sector, aportadas por variados medios probatorios. Por ende, la conclusión fáctica en cuestión no aparece sustentada en elementos científicos concretos, ni en máximas de experiencia validadas intersubjetivamente y, en lo que respecta a las reglas de la lógica, el juicio emitido no cae necesario desde las premisas.

Finalmente, en lo que hace a la data de la muerte y a sus causas, se afirmó en la sentencia recurrida que la edad del menor y las características del sector incidieron en un peligro real para éste, que se tradujo en el resultado mortal, consecuencia del abandono.

El razonamiento utilizado al efecto por los jueces, sin embargo, resulta contradictorio, pues, por una parte se reconoce que la causa de la muerte ha sido indeterminada por los peritos y, no obstante ello, fijan una data cercana entre la muerte del menor y la denuncia de su extravío (sin apoyo científico), concluyendo el carácter peligroso del abandono a que fue expuesto, al dejarlo en un sector de la pampa donde no existen personas que pudieren socorrerlo.

Así las cosas, además de infringir el principio de no contradicción, el razonamiento en cuestión se encuentra afectado por la falencia de las premisas que le sirven de sustento, entre las cuales se encuentra el hecho del abandono, ya criticado con anterioridad.

En definitiva, los sentenciadores del fondo efectivamente han incurrido en infracciones a los parámetros de sana crítica, del modo indicado, afirmando como verdaderos ciertos hechos sin respetar las reglas de la lógica formal.

NOVENO: Que, en razón de lo anterior, corresponde acoger el recurso de nulidad impetrado por la defensa, por actualizarse la causal invocada, esto es, aquella contemplada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, toda vez que el fallo impugnado no ha expuesto en forma clara, lógica y completa los fundamentos que han servido al establecimiento de los hechos objeto del juzgamiento.

DÉCIMO: Que, de acuerdo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 384 del Código Procesal Penal, no se emitirá pronunciamiento respecto de la tercera causal invocada, por resultar innecesario.

EFFECTOS DE LA DECISIÓN ANULATORIA.

UNDÉCIMO: Que, de conformidad a lo establecido en los artículos 374, 384 y 386 del Código Procesal Penal, la decisión de nulidad debe abarcar la invalidación de la sentencia y del juicio en que ésta recayó, definiendo el estado en que hubiere de quedar el procedimiento.

Al efecto la parte recurrente, en el primer otrosí de su recurso, solicitó que la eventual invalidación no se extendiera a los demás delitos que formaban parte de la acusación y respecto de los cuales se dictó sentencia absolutoria.

En razón de ello, en la vista, se llamó a los comparecientes a debatir respecto de dicha cuestión, a la luz de lo dispuesto en el artículo 360 del texto legal ya citado, en cuanto expresa que el tribunal ad quem sólo tiene competencia para pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado.

En el caso específico de que se trata, sólo la defensa de la acusada Gabriela Blas Blas dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva y sólo en cuanto resultó por ella condenada. Por lo tanto, en lo demás no recurrido, y respecto del otro acusado, que fue absuelto, la sentencia y el juzgamiento no pueden ser objeto de modificación alguna, incidiendo la presente

invalidación únicamente respecto de la recurrente y en lo que se refiere a los hechos que en la acusación fueron calificados como abandono de menor.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 360, 374, 376, 384 y 386 del Código Procesal Penal, **SE ACOGE** el recurso de nulidad deducido por la defensa y, en consecuencia, **SE INVALIDA TANTO LA SENTENCIA COMO EL JUICIO ORAL** que le ha servido de antecedente, por haberse incurrido en la infracción del artículo 374, letra e), del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal.

La sentencia anulada es la de quince de abril de dos mil diez, cuya copia está incorporada de fojas 1 a 26 de este legajo y que se pronunció en los antecedentes RIT 221-2009, RUC 0710014873-5, como producto del juicio realizado ante el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, debiendo realizarse un nuevo juzgamiento ante jueces no inhabilitados de dicho tribunal sólo respecto de la acusada Gabriela Blas Blas y en relación a los hechos que la acusación fiscal calificó como abandono de menor.

Regístrese, notifíquese y comuníquese por correo electrónico.

Redacción del Ministro don Rodrigo Cerda San Martín.

Rol N° 158 – 2010- Ref.